
Entre dos fuegos
El terrorismo, la guerra y los nuevos retos del
movimiento social global contrahegemónico

José María Gómez*

Cuando el 11 de septiembre la televisión transmitió en directo los atentados terroristas contra las torres gemelas y el Pentágono, una sensación generalizada, casi una certeza –tal vez la única en una jornada llena de perplejidad, confusión y espanto– acompañó las imágenes que se diseminaban en todos los rincones del planeta: el mundo, a partir de entonces, no podía ser el mismo. Lo inimaginable había ocurrido y, con ello, una brecha en el tiempo parecía abrirse dejando al siglo XX definitivamente atrás. Otro mundo, otro siglo. Y esa extraña vivencia experimentada a escala global ante algo inédito e inconmensurable que, no obstante hablar el conocido lenguaje de la violencia, bloqueaba la comprensión.

La pregunta inevitable que se plantea es qué acontecimiento histórico es éste que envuelve su origen en una densa opacidad y se revela con significación y alcance tan esquivos. Desde luego, dada la proximidad del mismo y la dinámica imprevisible de los procesos que desencadena (geopolíticos, de seguridad, económicos, ideológicos, psicosociales, etc.), se trata de una pregunta todavía sin

* Polítologo, profesor del Instituto de Relações Internacionais de la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro y de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

respuestas, que suscita reflexiones y conjeturas incesantes. Sin embargo, pasados dos meses y medio, y especialmente después de la maciza reacción militar de Estados Unidos contra Afganistán, ya se perfilan algunos elementos de análisis referidos a las consecuencias inmediatas del atentado y a la emergencia de ciertos trazos distintivos de la situación internacional. Como estas notas se inscriben en un esfuerzo de interrogación a propósito de los riesgos y retos que el cambio abrupto de la política mundial impone al movimiento social transnacional contra la globalización neoliberal, organizaré mi exposición en torno a dos ejes principales. El primero, más extenso, está centrado en el nuevo tipo de “guerra” al terrorismo que, bajo las actuales condiciones de globalización, subvierte el mapa geopolítico y se proyecta sobre el conjunto de las relaciones de poder en el escenario internacional. El segundo, aborda determinados impactos y desafíos que el movimiento social global contrahegemónico enfrenta en el nuevo contexto mundial post-11 de septiembre, los cuales lo obligan no sólo a redefinir la agenda de movilización sino también a superar una serie de dilemas e impases estratégicos que ya lo afectaban antes del atentado terrorista.

La guerra imperial contra el terrorismo global

El punto de partida en la comprensión de la actual crisis internacional es el reconocimiento de la magnitud y la gravedad de los dos hechos entrelazados que están en su origen. Por un lado, el atentado terrorista y lo que inmediatamente reveló. Al final de cuentas, la única superpotencia existente fue atacada en el propio territorio (la primera vez en casi doscientos años), por una red terrorista transnacional islamista (y no por un estado), mediante aviones comerciales de compañías estadounidenses (y no por medios militares convencionales externos) que se estrellaron contra edificios que son los símbolos emblemáticos de su poder financiero y militar, provocando destrucción material y miles de víctimas civiles. En otras palabras, la aplastante supremacía militar de la superpotencia resultó impotente frente a la nueva arma mortífera utilizada por un actor transnacional no estatal que, con eficacia organizacional y motivación ideológico-religiosa capaz de justificar la inmólación y el asesinato de inocentes, busca propagar su mensaje político a través del efecto simbólico y mediático de la acción terrorista.

Por otro lado, la reacción de Estados Unidos ante el choque provocado por la pérdida de la pretensión de invulnerabilidad territorial (que, durante años, creían haber alcanzado) y la consiguiente generalización de la inseguridad y el miedo en la población. Como se sabe, herido en su orgullo nacional, pero con todos los megadispositivos de poder intactos, el hegemon declaró unilateralmente, en nombre “del Bien contra el Mal”, la guerra global sin cuartel contra las redes terroristas y los estados que les servían de santuario y protección. En la primera etapa de esa larga guerra anunciada, el blanco escogido fue Afganistán, y los objetivos decla-

rados eran derribar el régimen de los talibanes, cazar “vivo o muerto” a Osama Bin Laden y eliminar la organización terrorista Al Qaeda, presuntos responsables del atentado.

Pero para llevar adelante la acción militar punitiva que decidió conducir solo en una de las regiones más peligrosas de la tierra –donde están en juego pesados intereses estratégicos y económicos, en una trama que envuelve potencias nucleares (Rusia, China, India, Pakistán) y un mosaico complejo de configuraciones conflictivas étnicas, tribales, religiosas y nacionales–, Estados Unidos articuló una inédita coalición internacional que incluyó, además de sus aliados europeos tradicionales, al antiguo enemigo del periodo de guerra fría: Rusia y las ex-Repúblicas Soviéticas, Tajikistán y Uzbekistán, y a dos países musulmanes directamente involucrados en la situación afgana desde la invasión soviética a fines de los años setenta, Pakistán y Arabia Saudita. Una vez conseguida la colaboración decisiva de Rusia y las nuevas bases y apoyos militares en Uzbekistán, Tajikistán y Pakistán (todo ello impensable antes de los atentados), el 7 de octubre comenzó la guerra del aire con bombardeos norteamericanos sistemáticos contra reductos y posiciones talibanes. Apesar de los “daños colaterales” infligidos a la población civil (de los cuales poco se comenta en los medios de comunicación occidentales) y el desastre humanitario que precipitaba o agravaba (más de 4 millones de refugiados en las fronteras con Irán y Pakistán, el hambre afectando a cerca de 7 millones de personas, destrucción de la precaria infraestructura existente, etc.), la finalidad perseguida era permitir el avance de la encargada de hacer la guerra terrestre: la hoy victoriosa y poco confiable coalición multiétnica, Alianza del Norte. No es un detalle secundario señalar que, poco después del discurso de Bush anunciando la “Operación Libertad Durable”, fue Bin Laden quien proclamó, a través del canal árabe Al Yazeera, sin hablar en nombre de ningún estado, que el mundo se había escindido en dos campos (“uno bajo la bandera de la cruz y otro bajo la del islam”) y que Estados Unidos no tendría más paz si continuaba agrediendo a los pueblos musulmanes (era la siniestra amenaza de la “tempestad de aviones”) (*Folha de São Paulo*, 8-10/10/2001). Al mismo tiempo, el bioterrorismo hacía su aparición, sin conexión aparente con las redes islamistas, diseminando aún más el pánico entre la población y las autoridades norteamericanas, mientras se aplicaban en diversos dominios (seguridad, financiero, derechos civiles), bajo la presión del gobierno estadounidense, sucesivos paquetes de medidas domésticas e internacionales de lucha contra el terrorismo en general.

Así, pasados más de dos meses del atentado del 11 de septiembre, no causa sorpresa que la situación internacional sea cada vez más percibida como prisionera de la lógica y el discurso de la “nueva guerra” y del “enemigo invisible”, los cuales, en estrecha vinculación y fortalecimiento mutuo, parecen alimentar hasta el paroxismo la amenaza de reproducción del binomio infernal violencia-seguridad, con implicaciones profundas y graves sobre los más variados ámbitos, actores y cuestiones cruciales de la política mundial. Es por ese motivo que quisiera detenerme en algunos aspectos y consecuencias de esta guerra lanzada en nombre del antiterrorismo.

Del aislamiento al intervencionismo imperial

El ataque terrorista puso fin a una acentuada orientación aislacionista que, en contraste con la administración de Clinton, caracterizaba desde el inicio a la política externa del gobierno de Bush. Tal postura era manifiesta en una diversidad de temas que estremecían la política internacional o eran objeto de difíciles negociaciones multilaterales (agudización del conflicto palestino-israelí, iniciativa estratégico-militar del escudo antimisil, protocolos sobre armas químicas y biológicas, reglamentación sobre uso y comercio de armas ligeras, protocolo de Kioto, Conferencia de Durban, etc.). La respuesta militar contra Afganistán y la campaña global antiterror marcan la vuelta plena del intervencionismo norteamericano, pero bajo la forma reforzada de un unilateralismo hegemónico imperial y en desmedro de instancias multilaterales, tratados y leyes internacionales.

En efecto, al levantar la terrible amenaza de destrucción de que quien “no está con nosotros está con los terroristas”, y al mismo tiempo dejar de lado a las Naciones Unidas y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a diferencia de lo ocurrido en la Guerra del Golfo y en la de Kosovo, Estados Unidos no sólo obtuvo la solidaridad y el reconocimiento del derecho de autodefensa de la casi totalidad de los estados existentes e incluso de estos organismos, sino también un alineamiento generalizado en la lucha contra el terrorismo global que incluía a Rusia y China. De hecho, esa lucha se ha convertido en el elemento central de un dispositivo de seguridad global que sólo puede aspirar a un mínimo de eficacia si funciona con la cooperación de todos los estados. Y aunque Estados Unidos, en la condición de superpotencia golpeada y desafiada, se reserva el derecho exclusivo de conducir las acciones y definir los objetivos, los medios y el enemigo evanescente, lo cierto es que tal dispositivo responde a una lógica imperial de represión, control y orden que no reconoce más límites espaciales y temporales¹. O como lo ha dicho el propio Bush en mensaje radiofónico a la nación, no se esperará:

... a que los terroristas intenten atacarnos otra vez. Donde sea que se oculten, y donde sea que conspiren, seremos nosotros quienes atacaremos. Creemos que nuestra causa es justa. Combatiremos todo el tiempo que haga falta, y venceremos (El País, 28/11/2001).

Una lógica imperial, por lo tanto, que ya operaba de manera ostensiva en los años noventa a través del desarrollo de dispositivos supraterritoriales de carácter jurídico, político-institucional e ideológico, en el cuadro de la economía política global dominante y en beneficio del bloque de poder mundial, del cual son parte los estados centrales –bajo el liderazgo norteamericano–, el capital productivo y financiero transnacional, las instituciones económicas internacionales y la ideología neoliberal (Cox, 1999).

La guerra contra Afganistán se inscribe en esa lógica imperial, combinando política del escarmiento y reposicionamiento de determinadas fuerzas del bloque de poder mundial en Asia Central. Sin embargo, dada la singularidad explosiva de la región, la estrategia escogida no hace más que aumentar el riesgo –de por sí ya elevado– de que la doble tarea fijada se convierta, a mediano y largo plazo, en un proceso multiplicador de todo tipo de violencia, con proyecciones imprevisibles e incontrolables hacia el resto del planeta. Basta recordar al respecto la extrema complejidad y extensión del campo de intereses y actores que, en las últimas décadas, ha alimentado el entrelazamiento de múltiples conflictos (Israel-Palestina, Cachemira, Chechenia, Irak, Kurdistán, Tajikistán, etc.) y asuntos (geopolíticos, étnicos, nacionales, religiosos, droga, terrorismo, petróleo, refugiados), con interferencia activa, complicidad o indiferencia de las potencias occidentales². Desde luego, para Estados Unidos no constituye un objetivo secundario derrocar al régimen talibán y capturar a Bin Laden y a la dirigencia de Al Qaeda. Su sociedad, tomada por un creciente sentimiento de miedo, patriotismo y deseo de venganza, así lo reclama. Su gobierno también, aunque por motivos adicionales: arrastrando problemas de legitimidad de origen y enfrentando una grave recesión económica, apostó a una demostración de fuerza sobre un blanco relativamente fácil –un país devastado y pobre, que contaba con uno de los regímenes más aislados, retrógrados y desacreditados del mundo– para reponerse de la “derrota simbólica” infligida por los perpetradores de los atentados, encontrar un poderoso pretexto a la crisis económica, y justificar tanto el incremento en los gastos militares y de inteligencia, como el avance de los controles de seguridad sobre las libertades civiles de ciudadanos norteamericanos y extranjeros.

Pero la ofensiva militar también tiene una íntima vinculación con la densa trama de intereses estratégicos y económicos que están en juego en Asia Central, especialmente después del fin de la Guerra Fría y del hundimiento de la Unión Soviética (la antigua superpotencia que en 1979 había invadido Afganistán y saliera diez años después derrotada por los *muyahidin*, que contaron con el apoyo decisivo en armas y dinero –y miles de voluntarios provenientes de países árabes e islámicos, entre ellos el propio Osama Bin Laden– de Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán). En realidad, con el vacío dejado por los soviéticos y la fuerte inestabilidad que se había instalado en el Golfo Pérsico a raíz de la guerra contra Irak, Estados Unidos –y tras él, los países industrializados europeos– revisó sus prioridades estratégicas y se lanzó, desde 1992, a ganar influencia en la región y alcanzar un objetivo primordial: el acceso y la explotación de los inmensos yacimientos de petróleo y gas en la cuenca del Mar Caspio, de importancia vital y creciente durante las próximas décadas (según estimaciones recientes, si Estados Unidos continua con el mismo ritmo de crecimiento económico, hacia 2020, precisará importar del resto del mundo cerca de 64% del petróleo que consume) (Ceceña, 2001). Sin embargo, en el nuevo “Gran Juego” que se configuraba –en analogía con el del siglo XIX, entre la Rusia zarista y Gran Bretaña–, las

negociaciones tendientes a asegurar el paso y garantía de los principales oleoductos proyectados (uno desembocaría en Turquía y el otro en Pakistán, después de atravesar territorio afgano) tropezaban con un complicado rompecabezas, en que no pocos de los antiguos enemigos se tornaban aliados y viceversa.

El propio Afganistán estaba hundido en una brutal guerra civil, sólo superada a partir de 1996, con la conquista de Kabul y la implantación en gran parte del territorio de “la ley y el orden” talibán. Incluso se establecieron contactos entre talibanes y estadounidenses a propósito del paso del oleoducto, pero fueron interrumpidos en virtud de los atentados contra las embajadas de Tanzania y Kenia y la negativa del nuevo régimen de entregar a Bin Laden y demás responsables apuntados, “huéspedes” demasiado próximos del núcleo de poder. Pakistán, a su vez, apoyaba a fondo al régimen talibán al que estaba unido por fuertes vínculos etnoreligiosos (la pertenencia de los talibanes a la etnia pashtún, el papel de las escuelas coránicas pakistaníes en la formación de una versión purista del islam y la influencia creciente de ésta última en la población y miembros del Ejército y del servicio de informaciones). Pero también los unía el futuro negocio del petróleo y, sobre todo, el rol estratégico fundamental que Afganistán desempeñaba para Pakistán frente a su principal adversario histórico –la India–, con quien disputaba el territorio de Cachemira: servir como retaguardia y campo de entrenamiento de combatientes islámicos. Rusia, por otro lado, pretendía recuperar la influencia perdida en la región, se oponía frontalmente a los talibanes, enfrentaba al separatismo islámico en Chechenia y apoyaba a la Alianza del Norte junto con India, Irán y China, al mismo tiempo que estrechaba los lazos de cooperación con esos países. Uzbekistán y Tajikistán se tornaban bases decisivas para la Alianza del Norte, compuesta principalmente por las etnias uzbeka y tajika, mientras que sus gobiernos también hacían frente a las amenazas de grupos fundamentalistas islámicos, al igual que China en la provincia de Sinkiang. En fin, redes islamistas y milicias de *jihadis* se expandían a lo largo de los focos de conflicto, combinando fundamentalismo religioso y terrorismo transnacional. Buscando apoyo y legitimidad en poblaciones desesperanzadas y sumergidas en la pauperización económica y la opresión política, se orientaban a partir de una visión estratégica dicotómica que divide al mundo en Occidente e Islam, y declaraban la “guerra santa” a Estados Unidos, su principal objeto de odio y movilización, en función de su parcialidad en la cuestión palestina, los bombardeos y el embargo económico a Irak, el sostenimiento de gobiernos despóticos y corruptos, y el establecimiento de bases militares permanentes en el Golfo³.

La subversión del mapa geopolítico y la trampa de la “guerra de venganza”

Es en ese conturbado contexto que la emergencia de la coalición internacional contra Afganistán provocó una verdadera mutación del mapa geopolítico. Tres consecuencias importantes cabe subrayar aquí. En primer lugar, como resultado de

los acuerdos diplomáticos con Rusia, Uzbekistán, Tajikistán y Pakistán, Estados Unidos finalmente logró, después de diez años de esfuerzos, una presencia directa en la región, inclusive militar, considerada crucial para garantizar sus intereses estratégicos y económicos a largo plazo (contención de China como posible futuro hegemón, acceso y protección de futuras inversiones en petróleo, gas, uranio y otros recursos estratégicos, etc.). En segundo lugar, Rusia vuelve al primer plano como aliado preferencial de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, queda con las manos libres para “resolver” la cuestión chechena –o sea, sin presiones occidentales en favor de los derechos humanos–, y pasa a ser reconocida su pretensión de colaboración, integración o adhesión a diversas organizaciones internacionales políticoeconómicas y de seguridad (OTAN, Unión Europea y Organización Mundial de Comercio)⁴. En tercer lugar, Pakistán, el ahora super aliado occidental y componente clave de la coalición por su pertenencia al mundo islámico, abandonó al régimen talibán a su suerte y abrió su espacio aéreo y territorial a fuerzas estadounidenses. En compensación, obtuvo la liberación de créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la reducción de parte de la deuda externa, el levantamiento de sanciones económicas por las experiencias nucleares, la promesa de futuras ventajas económicas y una generosa ayuda militar.

Sin embargo, sería ilusorio creer que tales cambios geopolíticos y el propio éxito del ataque militar a Afganistán traerán una situación segura y de poder estable en Asia Central, que ponga bajo control su enorme potencial de conflictos. En efecto, que se alcancen todos, o una parte de los objetivos que están por detrás de esta guerra (“efecto demostración” a otros estados que alberguen o promuevan organizaciones terroristas, reposicionamiento hegemónico en la región, derrocar a los talibanes, desmantelar Al Qaeda, capturar o eliminar a Bin Laden y sus lugartenientes) no significa que Afganistán se “normalice” a corto plazo, con la simple instalación de un gobierno multiétnico provisorio, una fuerza de paz multinacional y la disponibilidad de recursos financieros para reconstruir el país devastado. Sería ignorar los riesgos inherentes a una guerra “por delegación”⁵, en la que el agente principal tiende a perder por completo el control de su delegado (basta recordar los casos de Jonas Savimbi, en Angola, y del mismo Bin Laden en Afganistán después de la *jihad* contra la ocupación soviética). De hecho, nadie puede garantizar que los actuales delegados internos –la Alianza del Norte y los jefes tribales pashtunes del sur– encargados de hacer el trabajo sucio del agente principal, no recurran, como entre 1992 y 1996, a atrocidades, represalias y peleas territoriales entre sí, reinstalando la guerra civil y diseminando virulentos conflictos etnonacionalistas hacia los países vecinos (Pakistán, Tajikistán, Uzbekistán). Se está, entonces, ante una situación en la que los verdaderos problemas empiezan, paradójicamente, cuando el agente principal vence en la guerra (Ignatieff, 2001).

Por otro lado, más allá del interés común de los estados vecinos en controlar la amenaza política proveniente de movimientos y organizaciones islamistas ra-

dicales, no se sabe cómo algunos de ellos (Pakistán, Irán) se posicionarán frente al nuevo escenario postalibán, ni en qué medida los cambios geopolíticos operados azuzarán las rivalidades entre potencias regionales (la ascensión de Uzbekistán o la más inquietante rivalidad entre Pakistán e India, en virtud de la pesadilla nuclear que suscita). Sin olvidar, por supuesto, la indefinición a largo plazo que envuelve la dinámica interestratégica de cooperación y competición del triángulo mayor: Estados Unidos, Rusia y China.

Pero “el carácter esquivo de la victoria” –según el elocuente título de tapa y editorial de *The Economist* (24-30/11/2001)– salta a la vista si se focaliza el motivo determinante de la guerra y se recuerda lo que se sabe de antemano, a la luz de diversas experiencias históricas de combate al terrorismo: que no es con una acción de ese tipo y envergadura que se erradicará –o se combatirá con eficacia– el terrorismo islamista, aunque Al Qaeda sufra duros golpes y Bin Laden sea al fin capturado o muerto. Más aún cuando se trata de un terrorismo inédito de naturaleza global, no instrumentalizado por ningún estado, que se desplaza y se recompone con extrema facilidad. Un terrorismo, en suma, transnacionalizado en reclutamiento, objetivo político e identidad –la comunidad musulmana dispersa a lo largo de cinco continentes–, que carece de una base popular territorializada, opera sin estructuras fijas y verticales de comando, cuenta con logística y financiamiento propio o privado, puede acceder a medios de destrucción de masa, y consigue un aprovechamiento integral de los procesos tecnológicos, financieros, organizacionales y mediáticos abiertos por la globalización en curso (Rouleau, 2001).

Por otro lado, si la lucha contra el terrorismo y sus estados cómplices o promotores se limita a una guerra cuyo objetivo declarado es hacer escarmiento en nombre del “Bien contra el Mal”, reivindicando el derecho exclusivo de “cazar vivos o muertos” a los presuntos criminales de los atentados del 11 de septiembre, pocas dudas caben de que ella generará efectos contraproducentes, que ahonden el miedo y el odio tanto en los países árabe-musulmanes como en los occidentales. De hecho, por más que se afirme que esta guerra no se dirige contra el pueblo afgano ni contra el islam (aunque los *lapsus calamis* iniciales sobre “la cruzada contra el terrorismo” y la “Operación Justicia Infinita” sugerían lo contrario), los bombardeos sistemáticos, las víctimas inocentes y la presencia de tropas norteamericanas y aliadas, tal como ocurrió con la Guerra del Golfo, reforzarán motivaciones y atraerán nuevos reclutamientos hacia las redes terroristas, además de tornar plausible, en amplios sectores de la población de países árabes e islámicos, el mensaje de “guerra santa” contra “las cruzadas infieles” que oprimen a la comunidad musulmana⁶. De más está decir que ello se intensificaría aún más –fuera del impacto negativo en la propia coalición internacional– si se confirman las señales recurrentes enviadas desde la Casa Blanca y el Pentágono de que la campaña militar se extenderá a otros países comprometidos con actividades terroristas (desde luego, con Irak a la cabeza de la lista). La guerra de venganza es entonces una trampa. Y una trampa peligrosa para los países occidenta-

les pues, sin poder eliminar por completo su vulnerabilidad ante un enemigo de esa naturaleza, sucumben a un discurso y una conducta de guerra ineficaz y más mortífera que el propio terrorismo, cuyas consecuencias perversas amenazan los valores que se pretenden defender: profundizar el racismo y la xenofobia, al mismo tiempo que justificar una escalada de poder represivo y de control que socava los derechos humanos y las libertades democráticas.

Un combate al terrorismo global que busque una mayor eficacia sin caer en la trampa de la estrategia del miedo y el odio, requeriría, en cambio, un planteamiento alternativo. Tal planteamiento no debería basarse en la guerra sino en un compromiso intransigente con el sistema de derecho, a fin de evitar la indiferenciación entre la lucha antiterrorista y la terrorista (o la existencia y reproducción de dos terrorismos íntimamente vinculados: el de estado y el privado). En otras palabras, privilegiar un método de acción policial y jurídica a nivel internacional –y en forma excepcional, también militar, para detener sospechosos y dismantelar redes terroristas–, destinado antes que nada a proteger a los civiles “de todos los credos y nacionalidades, dondequiera que vivan”, y a capturar a los criminales para ser juzgados ante un tribunal internacional, acatando “escrupulosamente tanto las leyes de la guerra como las de los derechos humanos” (Held y Kaldor, 2001). Sin embargo, siendo el terrorismo un crimen político, ese método estaría condenado al fracaso si las cuestiones políticas que lo motivan y alimentan no son atacadas de raíz, a través de un efectivo plan de acción política a corto, medio y largo plazo, que aísle y deslegitime el mensaje y la acción de las redes terroristas. Todo lo cual implica, desde una justa solución de la cuestión palestina y el cambio de las políticas dominantes en el Golfo Pérsico y en Asia Central, una profunda transformación de las estructuras globales de desigualdad económica, discriminación cultural y concentración de poder y riqueza. Puesto en tales términos, no sorprende que un planteamiento de esa índole no esté en la agenda política internacional actual ni que a ella se incorpore debido a la simple fuerza del argumento. En verdad, sólo un poderoso movimiento social transnacional puede levantarlo, orientado por cuestiones éticopolíticas globales, y con capacidad suficiente para desenvolver el debate político en su dirección y forzar a los principales estados e instituciones internacionales a introducirlo.

La “nueva guerra” de seguridad del Leviatán imperial y las restricciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas

Más allá de la ofensiva militar contra Afganistán, Estados Unidos impulsó un dispositivo de seguridad global antiterrorismo que pasó a adoptar, no por casualidad, el lenguaje figurado de la “nueva guerra”. Como afirmara poco después de los atentados del 11 de septiembre el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld:

... esta guerra no será necesariamente del tipo en que nos concentramos en blancos militares y fuerzas macizas para alcanzarlos. En vez de ello, la

fuerza militar será uno entre los numerosos instrumentos que usaremos para detener individuos, grupos o países comprometidos con el terrorismo. Nuestra respuesta podrá incluir disparos de misiles contra objetivos militares en algún lugar del mundo; y estamos dispuestos a comprometernos con el combate electrónico para rastrear y contener inversiones en centros bancarios en el exterior. En este conflicto, los uniformes serán trajes de banqueros y ropas grunge de programadores de computación, tanto como ropas de camuflaje para el desierto [...] Aún el vocabulario de esta guerra será diferente. Cuando invadamos el territorio del enemigo, podremos estar invadiendo su ciberespacio [...] Estamos queriendo involucrarnos sin plazo. No tenemos reglas fijas para desplazar nuestras tropas; en vez de esto, vamos a establecer directrices para determinar si la fuerza militar es la mejor manera de alcanzar un objetivo. [...] El público podrá ver algunos combates militares dramáticos que no resultarán en cualquier victoria aparente, o podrá no estar consciente de otras acciones que llevarán a victorias mayores. Batallas serán libradas por funcionarios de migraciones y aduana deteniendo sospechosos en nuestras fronteras y por diplomáticos asegurando cooperación contra el lavado de dinero (*Jornal do Brasil*, 26/09/2001).

Al plantearse la lucha global contra el terrorismo en esos términos, se revela que quienes la conducen –por lo demás, veteranos de la Guerra del Golfo– combinan la persistencia del viejo espíritu de guerra fría con la clara conciencia de la naturaleza y la magnitud de los cambios que procuran implementar. Desde esa perspectiva, se ha logrado finalmente, después de una década, sustituir el comunismo por un nuevo enemigo, difuso, “invisible”, y con características que le permiten atacar por sorpresa en todo tiempo y lugar. Resulta ocioso enfatizar la funcionalidad de tal enemigo para estrategias imperiales de dominio y control en el espacio global. Con un agravante: al estar sustentada la campaña global antiterror en la premisa de que “quienes están con ellos, están contra nosotros” y pasar a ser definido el terrorismo, sin ninguna especificidad, en los términos ambiguos y amplios usados por el Departamento de estado (capaces de abarcar, por lo tanto, desde grupos insurgentes y movimientos de oposición política hasta organizaciones criminales), el peligro real que se corre es que Estados Unidos lleve adelante, con plena autonomía, guerras e intervenciones militares sin límites y sin fin (Cepik, 2001), por encima de leyes e instancias multilaterales (como la ONU, responsable de “el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”, según el artículo 24 de la Carta).

Pero junto con ese peligro hay otro no menos grave, que avanza desde el plano doméstico estadounidense hacia el internacional (como lo ilustran, entre otros, los proyectos en curso en Canadá, Unión Europea y Corea del Sur), con un conjunto de medidas y modificaciones legislativas que han sido aprobadas o se pretende aprobar, en nombre de la lucha contra el terrorismo. No se trata, desde luego, de la pertinencia de ciertas decisiones específicas tendientes a reforzar la ca-

pacidad de investigación y coordinación policial y judicial, quiebra del sigilo bancario y congelamiento de fondos financieros, o incrementar los controles de seguridad en lugares claves (aeropuertos, fronteras, represas, fábricas nucleares, etc.), sino a un conjunto de disposiciones que atribuyen poderes represivos y de control sin precedentes a organismos de inteligencia y seguridad, cuya sanción y ejercicio implican un ataque directo al sistema de derecho fundado en el imperio de la ley, a determinados derechos de ciudadanía democrática y al régimen internacional de derechos humanos.

En plena marea patriótica y bajo el argumento de la celeridad para enfrentar una situación extraordinaria de emergencia, no fue difícil para el gobierno de Bush hacer aprobar por el Congreso un paquete de leyes antiterrorismo que endurece penas y extiende poderes de policía, estableciendo limitaciones a los derechos a la privacidad y de defensa (intervenciones telefónicas y rastreamiento de comunicaciones por Internet a discreción, detención incommunicable de hasta siete días de extranjeros sospechosos, etc.), pero que se aplican con extremo rigor a inmigrantes, legales y clandestinos⁷. Más inquietantes son, sin embargo, otras medidas de excepción tomadas por el gobierno, sin necesidad de pasar por el Congreso, que violan de manera abierta los derechos constitucionales: los interrogatorios “voluntarios” de cinco mil residentes recientes de origen árabe, la supresión del secreto entre detenidos y abogados, la prisión por tiempo indeterminado de centenas de personas –aunque no existan pruebas ni sospechas–, el plan de vigilancia de grupos religiosos y políticos, y la más grave de todas, la instauración de tribunales militares para juzgar extranjeros sospechosos de terrorismo.

En efecto, mediante dichos tribunales, el presidente de Estados Unidos ha obtenido, de hecho, “el poder dictatorial de encarcelar o ejecutar extranjeros” (Safire, 2001), dentro y fuera del territorio norteamericano, con sólo alegar que tiene ‘motivos para creer’ que son miembros de una organización terrorista. Esto es, determinará quién y dónde juzgar, a través de juicios sumarios, a puerta cerrada, con jurados militares, sin reglas procesales fijas, con un nivel flexible de pruebas y abogados no elegidos por los acusados, que pueden imponer penas de muerte, sin posibilidad de revisión por tribunales civiles (*El País*, 16/11/2001). En síntesis, los extranjeros sospechosos, a quienes no se les reconocen siquiera los derechos limitados de una corte militar convencional, “tienen que hacer frente a un ejecutivo que ahora es instructor, acusador, juez, jurado, carcelero y ejecutor” (Safire, 2001). Para aplacar las protestas de grupos de defensores de derechos civiles, juristas, políticos y una parte de la prensa escrita –“Una amenaza al imperio de la ley” fue el título del editorial del *New York Times* del 15 de septiembre–, tanto Bush como el secretario de justicia, el ultraconservador John Ashcroft, salieron en defensa de la propuesta, insistiendo en que la medida es sólo para extranjeros, y no para ciudadanos norteamericanos, en la misma línea de justificación expresada por el vicepresidente, Dick Cheney, de que “un tribunal militar garantiza que estos individuos reciban el tipo de trato que merecen” (*El País*, 16/11/2001).

Fuentes del gobierno sostienen que los tribunales militares no van a funcionar en Estados Unidos, sino en los lugares donde se capturen los sospechosos (probablemente Afganistán y Pakistán, puesto que se piensa en la posibilidad de la captura o entrega de Bin Laden y los principales dirigentes de Al Qaeda). Si así fuera, sería la correspondencia perfecta entre una guerra de venganza y una parodia mal camuflada de justicia (Badinter, 2001). Pero es más que eso, ya que esta medida, como la mayoría de las que fueron tomadas, significa la negación misma de la igualdad ante la ley y la separación de los poderes, pilar del estado de derecho que Estados Unidos tanto proclama defender. Y por otro lado, una escisión brutal entre derechos de ciudadanía territorial (exclusivos para aquellos a quienes el Estado norteamericano reconoce como tales) y derechos humanos supraterritoriales (reconocidos a cualquier ser humano, independientemente de diferencias de nacionalidad, clase, sexo, raza y religión), lo cual permite violar las propias normas del régimen internacional de derechos humanos y a la vez marcar un retroceso en la trabajosa conquista de las últimas décadas que intenta hacer del mismo un núcleo fundamental –aunque embrionario, problemático e incompleto– del proceso de construcción de una ciudadanía global. Pese a ello, y a las protestas y críticas que dentro y fuera de Estados Unidos se hacen oír sobre sus impactos más visibles (ineficacia de la estrategia preventiva de arrestos de sospechosos, aumento del racismo y xenofobia, restricciones a la inmigración y al derecho de asilo, etc.), todos los sondeos demuestran que la mayoría aplastante de la opinión pública apoya al gobierno⁸. Este ostensivo debilitamiento de energías cívicas e institucionales de una sociedad que se pretende democrática, revela que los riesgos de involución autoritaria son elevados y reales. No muy diferente, por lo demás, de lo que ocurre en Europa⁹. Así, la gran paradoja de la actual lucha global contra el terrorismo, llevada adelante en nombre de la defensa de las libertades democráticas, es que uno de los objetivos que el enemigo “invisible” busca –erosionar los cimientos de la propia democracia–, en parte se autorealiza.

En suma, en torno a las medidas y legislaciones de excepción antiterrorista que, con ritmos variados, se despliegan desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, se configura una especie de Leviatán imperial sin fronteras, que plantea y procura resolver a su modo (o sea, represivo y con control social creciente) el clásico dilema del orden político entre seguridad y vigilancia versus libertades civiles y política democrática. La irrupción de este dispositivo global de seguridad en un contexto de la política mundial que, antes de los atentados del 11 de septiembre, se caracterizaba por la multiplicación de luchas y conflictos sociales en distintos países y regiones, así como por el crecimiento vertiginoso de un movimiento social transnacional de contestación abierta al ordenamiento económico político global neoliberal, no puede sino tener graves consecuencias. Basta sólo imaginar la posibilidad de criminalizarlos con la simple calificación de “terroristas”, una calificación cuyo uso circunstancial –como siempre ha sido por los estados durante el siglo XX, a fin de reprimir determinados opositores internos– deriva de una definición esencialmente ambigua y unificada de alcance mundial.

El movimiento social global contrahegemónico frente al terrorismo global y la “nueva guerra” imperial

El mal llamado movimiento social “antiglobalización” se constituyó a partir de la oposición abierta tanto a las políticas económicas y a las consecuencias negativas de la globalización neoliberal como al rol decisivo que en ella juegan las principales instituciones y agencias internacionales. De naturaleza eminentemente global (pues es en ese espacio, en sus tiempos y contradicciones, que los objetivos, las formas y los medios de lucha se construyen), plural y heterogéneo por definición (de él hacen parte viejos y nuevos movimientos sociales, ONGs, redes de acción cívica y colectivos políticos con las más variadas concepciones, intereses, identidades y recursos organizacionales), este activismo transnacional de nuevo tipo logró, en menos de dos años, rediseñar la cartografía de la política mundial, tal como lo ilustran los nombres de las ciudades de Seattle, Porto Alegre y Génova, entre muchos otros. Además, y es lo más importante, ha sido políticamente reconocido por el propio establishment del poder económico y político mundial, a raíz de la repercusión y legitimidad social creciente de sus manifestaciones de masa, conferencias o foros alternativos y campañas específicas (anulación de la deuda externa de los países del Tercer Mundo, supresión de los paraísos fiscales, introducción de la tasa Tobin, etc.).

Aunque en la génesis del movimiento se encuentran complejos procesos históricos de transformación estructural del capitalismo, de la política y de la cultura contemporánea –abordados con frecuencia bajo el controvertido rótulo de globalización (Mittelman, 2000; Scholte, 2000)¹⁰–, su origen inmediato remonta a la segunda mitad de los años noventa, cuando se multiplican y se intensifican, en diferentes partes del planeta, manifestaciones de protesta y resistencia social a las políticas económicas dominantes de cuño neoliberal. En efecto, aplicadas de manera sistemática durante más de una década en el Norte, el Este y el Sur –en una clara expresión de la hegemonía incontestable alcanzada por ese ideario y por el bloque de poder imperial que lo sustenta en la economía política global–, saltaban a la vista la magnitud, la extensión y la profundidad de sus consecuencias más negativas: concentración exponencial de riqueza y poder en y entre países y regiones; aumento de la desigualdad, polarización y exclusión social; crecimiento del desempleo y precarización del trabajo; negación de la ciudadanía social; intensificación de la degradación ambiental; fuerte disminución de la autonomía político estatal; debilitamiento de la democracia política y de las formas partidarias de representación; erosión de culturas tradicionales, etc. Una evidencia que también ponía en primer plano el vínculo orgánico de esas políticas con las agencias económicas multilaterales, las cuales asumían, sobre todo en la periferia y semiperiferia capitalista, la condición de vectores político-institucionales de regulación, presión y fiscalización de estados y economías nacionales, en los respectivos dominios de actuación (en especial, el FMI y el programa estructural de

ajuste; el Banco Mundial y los proyectos de desarrollo; y la OMC y el “constitucionalismo disciplinador” de la liberalización del comercio mundial).

Así, la vida cotidiana de millones de personas era afectada por los impactos desestructuradores del capitalismo global, que pasaba a combinar, entre otras características, la reorganización espacial de la producción y las finanzas, el desmonte del estado de bienestar (allí donde existía), la extrema fragmentación del mundo del trabajo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales, la creciente contradicción entre las exigencias del capital transnacional y las formas democráticas territoriales de gobierno, la hipercompetencia en que “el ganador se lleva todo” y una acentuada mercantilización de las esferas de la vida social. No sorprende, por lo tanto, que en esta nueva “era de la desigualdad” se asista a la extensión de conflictos y resistencias sociales a la política de globalización llevada adelante por los propios estados y las agencias económicas multilaterales. Y es en ese contexto que emerge el movimiento social transnacional, a partir de la protesta multitudinaria en Seattle, como resultado de convergencias progresivas y precarias, alimentadas tanto por experiencias sectoriales de luchas pasadas como por nuevas iniciativas (de las movilizaciones multiformes contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), al Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad contra el Neoliberalismo convocado en 1996 por el zapatismo) de cuestionamiento político a la gobernancia global neoliberal y su núcleo institucional más visible (Aguiton, 2001a; Seoane y Taddei, 2001).

La radicalización de la política democrática en el espacio global y la tentativa imperial de criminalizarla

Aunque el nuevo activismo transnacional presenta notorias limitaciones (minoritario, problemas de sobre y subrepresentación, tensiones entre niveles nacional y global de acción y entre afirmación de identidades particulares y necesidad de alianza, clivajes internos respecto al horizonte de reforma o de ruptura con el capitalismo global, etc.), no cabe duda que la constelación de movimientos y organizaciones sociales que aglutina, operando en y a través de numerosos países y regiones, asume un carácter abiertamente contrahegemónico. Podría decirse que frente a la globalización “de arriba” conducida por el bloque de poder imperial, este tipo inédito de acción colectiva representa el embrión de una globalización “de abajo” en términos de contrapoder, no obstante la gigantesca asimetría en la correlación de fuerzas existentes. Incluso no faltan interpretaciones que le atribuyan un potencial de transformación democrática radical del orden mundial vigente –la ascensión de un “nuevo multilateralismo”–, capaz de reconstruir sociedades civiles y autoridades políticas en escala global, en un sistema de gobernancia “de abajo hacia arriba” y de organización poshegemónica con relación al capital, a los estados, al patriarcalismo y demás estructuras de dominación (Cox, 1999).

De todos modos, tal potencial emancipatorio de pueblos, clases, grupos y sectores subalternos, pasa actualmente por la resistencia y la contestación radical al orden hegemónico mundial. Un orden que es fruto de un complejo y nebuloso bloque de poder imperial, formal e informal, público y privado, cuyo núcleo duro está constituido por el capital transnacional, por los estados centrales –bajo la supremacía de la superpotencia estadounidense–, la ideología neoliberal y las instituciones internacionales de apoyo financiero, desarrollo y seguridad (Cox, 1999).

Pero más allá de las limitaciones y del potencial transformador del movimiento social transnacional, lo cierto es que su irrupción abrió una brecha en el consenso hegemónico neoliberal de la mercantilización desenfrenada, del ajuste estructural permanente y de la “buena gobernanza”. Tras esa brecha, por un lado, se introdujo el debate político sobre el contenido, la forma y las consecuencias de la política dominante de la globalización. Y por el otro, se intenta, con enormes dificultades, sentar las bases que permitan construir amplias alianzas y convergencias, estrategias alternativas viables y un proyecto normativo de “otra” globalización, con justicia social, democracia y seguridad humana (Gómez, 2001). Como era de esperar, la reacción del bloque de poder imperial ante el único vector social que avanzaba y crecía con visiones, propuestas y prácticas de democratización del poder a escala mundial, no tardó en llegar. Primero fue la tentativa retórica de reconocer, a través del discurso recurrente de las agencias multilaterales y de diversas personalidades de la política y de la comunidad de negocios de los países centrales, la necesidad de “humanizar” la globalización económica y corregir sus desvíos sociales, ambientales y de desarrollo. En ello también incidía el nuevo clima ideológico instalado después de la onda de crisis global que golpeó a los países llamados “emergentes” entre 1997 y 1999, en el que se sucedían las críticas en el seno del propio establishment acerca de la conveniencia de atenuar las políticas ultraliberales y recuperar un papel más activo del estado en la economía. La respuesta efectiva vino, en cambio, bajo la forma de una escalada tendiente a criminalizar, denigrar, dividir y aislar el movimiento de oposición a la globalización neoliberal, precisamente a medida que éste último crecía en capacidad movilizadora y sus reivindicaciones y manifestaciones provocaban un fuerte impacto en amplios sectores de las sociedades civiles (George, 2001).

La protesta de Génova, en julio pasado, marca sin duda el momento culminante de esa estrategia antimovilizadora y represiva, aunque varios de sus elementos ya estaban presentes en Washington, Praga y Niza el año pasado, y sobre todo, en Davos, Quebec y Göterborg, este año. Desatada por el gobierno de Berlusconi –que contó con el complaciente silencio aprobador de los dirigentes del G-8 allí reunidos–, el saldo es conocido: un muerto, centenas de heridos, destrucción del centro de comunicaciones alternativas, detenciones abusivas y humillaciones diversas cometidas por la policía, retención de activistas extranjeros en la frontera italiana, y la atribución de responsabilidad jurídica criminal por actos de violencia a los organizadores del Foro Social de Génova. Es decir, en lugar de

proteger una manifestación de casi doscientas mil personas y centenas de organizaciones ejerciendo los derechos democráticos de reunirse y expresar públicamente su oposición bajo formas no violentas de desobediencia civil, se la criminalizaba y se la reprimía a través de una táctica de confrontación agresiva generalizada, como si esa multitud pacífica pudiese confundirse con los minúsculos grupos radicales violentos del black bloc o con simples provocadores (Della Porta y Tarrow, 2001). Además, se proseguía con la contraofensiva ideológica iniciada después de Seattle por autoridades nacionales e internacionales, comunidad de negocios, media especializada y think tanks conservadores, tendiente a descalificar la imagen pública de los activistas transnacionales (“indeseables”, “vándalos genéticamente violentos”, “antimodernos”, “enemigos de los pobres”, falta de representatividad de movimientos y organizaciones, etc.) (Petrella, 2001; George, 2001). Por último, a fin de neutralizar el movimiento social global, se reafirmaba más que nunca, después de los sucesos de Génova, la política del aislamiento, o sea, evitar la convocación de grandes reuniones internacionales en ciudades que servirían de palco para las protestas antiglobalización liberal, tal como lo ilustraban las decisiones de convocar la conferencia de la OMC en el emirato de Qatar o la reunión de cúpula del G-8 del año siguiente en un lugar de montaña de difícil acceso en Canadá.

A pesar de que la brutalidad represiva y las provocaciones policiales han tenido en la opinión pública italiana y europea un efecto contrario al esperado (pues suscitaron la condena de la violencia policial y un mayor reconocimiento de la legitimidad de las exigencias sociales, ambientales y democráticas sobre el mundo), lo ocurrido en Génova, sin embargo, planteó al movimiento serios dilemas respecto a la forma y a la eficacia de la acción que privilegiaba. A partir de entonces, la gran cuestión pasó a ser cómo garantizar la unidad y el carácter pacífico de las manifestaciones –base fáctica y normativa de la convergencia horizontal de diversos movimientos y organizaciones asociativas, sindicales, ambientalistas, religiosas, etc.–, frente a la escalada represiva y criminalizante de los estados cuyo objetivo era intimidar, dividir y deslegitimar el movimiento ante la opinión pública. Más aún cuando el rechazo y la condena de la violencia (tanto la de los estados como la de los grupos ultraminoritarios que le hacen el juego al adversario) no implica de modo alguno desistir de la radicalidad necesaria de otras formas de acción y de lucha, dados los escasos resultados efectivos que hasta ahora han sido alcanzados. Fue en medio de ese proceso que cayeron literalmente del cielo los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Contra el terrorismo global y la “nueva guerra” imperial. Por “otra” globalización de seguridad humana, justicia social, democracia y derechos humanos

Dada la situación que el movimiento social transnacional atravesaba, los atentados terroristas contra las torres gemelas y el Pentágono generaron fuertes

impactos políticos: hacia adentro, parálisis y perplejidad; hacia afuera, un agitado debate sobre su futuro inmediato. Por cierto, no faltaron sugerencias o explicitaciones –a la Berlusconi, por ejemplo– que asimilaban o establecían un sordido paralelismo entre las redes terroristas islamistas y el movimiento social contrahegemónico. A final de cuentas, compartían el mismo enemigo y, por ende, las luchas respectivas eran, aunque con métodos diferentes, contra los mismos símbolos dominantes del orden mundial: el capital financiero transnacional y la fuerza militar de la superpotencia. La mala fe de este argumento es evidente, porque todo los opone (Aguiton, 2001). El terrorismo global islamista –o cualquier otro que por ventura pueda surgir– significa la más completa negación del movimiento social antiglobalización liberal. De hecho, el terrorismo en general (imperial, estatal o privado), y el responsable en particular por los atentados del 11 de septiembre, son absolutamente incompatibles con la práctica, la concepción y los objetivos que orientan al movimiento social, el cual rechaza y condena la violencia, fundado en razones morales y políticas indisociables. En otras palabras, el primero expresa un grupo secreto de iluminados y alucinados cultivadores de la muerte que, lejos de emancipar a “los desheredados de la tierra”, busca propagar su mensaje político religioso de salvación, homogeneización e intolerancia a lo diferente en el mundo, a través del asesinato planificado de inocentes. El movimiento social transnacional es el único sujeto de transformación que propone alternativas globales al orden mundial liberal, sin caer en retrocesos nacionalistas, integristas o reaccionarios (Aguiton, 2001b). Y lo hace en la condición de sujeto plural y heterogéneo por definición, que rehabilita la política como práctica colectiva de lucha basada en la deliberación democrática, en el compromiso con los derechos humanos, en el diálogo intercultural y en la solidaridad con los pueblos, abrazando utopías de emancipaciones sociales de igualdad y diferencia (o de igualdades que no descaractericen y de diferencias que no discriminen, según la feliz expresión de Boaventura de Sousa Santos) (de Sousa, 2000).

En rigor, nada hay de antiimperial, en el sentido radical del término, en los atentados cometidos. No sólo porque quienes supuestamente los han perpetrado fueron, financiera y militarmente, criaturas e instrumentos directos de la política imperial en el tramo final de la guerra fría, sino porque la existencia del “enemigo invisible” funciona como la justificación perfecta de la “nueva guerra” –y de las guerras reales, como la de Afganistán– que el bloque de poder imperial se propone llevar adelante por medio del dispositivo de seguridad y control global, con restricciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas, y multiplicación del racismo y la xenofobia. En suma, no hace más que reforzarlo, pues promueve los gastos e invenciones militares de nuevo tipo y la corrida armamentista, no aumenta la confianza de los pueblos, clases, o grupos oprimidos en su propia fuerza emancipadora, y acentúa o introduce los gérmenes de la división y polarización (patriotas-antipatriotas, pronorteamericanos-antiimperio, radicales-moderados, etc.) en el movimiento contra la globalización capitalista, en pleno

crecimiento desde Seattle, Porto Alegre y Génova (Bensaïd y Pelletier, 2001). Más grave aún, puede llevar al paroxismo de la lógica del biopoder (Hardt y Negri, 2000) como control y vigilancia de los cuerpos ante un enemigo evanescente y casi indescifrable, sin dejar de fortalecer la tendencia a la criminalización tanto en relación con disidentes u opositores internos calificados de “terroristas” por regímenes y estados, como con los activistas transnacionales opositores al orden liberal que participan en protestas, foros y campañas en distintas partes del mundo (Della Porta y Tarrow, 2001).

Hay quien sostiene que el dispositivo de seguridad global antiterrorismo no debe ser vinculado a la globalización económica neoliberal, ya que ambos renían a problemas y soluciones completamente separados, no obstante los dos combates en que están involucrados se realizan a escala planetaria: el primero viene de la mano armada de los estados, y dado que el terrorismo global islamista es un enemigo común a todos, sería hipócrita no apoyar abiertamente a la ofensiva militar norteamericana en Afganistán para destruir talibanes y Al Qaeda; al segundo, en cambio, lo empujan los movimientos sociales y políticos con el objetivo de poner fin al dominio destructivo de la lógica financiera y de restaurar la autonomía de lo político sobre lo económico (Touraine, 2001). Otros llegan a afirmar que la irrupción del terror global “equivale a un Chernobyl de la economía mundial: igual que allí se enterraban los beneficios de la energía nuclear, aquí se entierran las promesas de salvación del neoliberalismo” (Beck, 2001), anunciando el redescubrimiento del primado de la política y el retorno del poder de cooperación de los estados. Otros van más lejos al afirmar la irreversibilidad de la globalización económica –aunque atenuada en los desvaríos ortodoxos neoliberales por obra de la vuelta de los estados para enfrentar dificultades de seguridad y de recesión económica– y prever la declinación o desaparición futura del movimiento social global contrahegemónico (Giddens y Dahrendorf, 2001). A todos esos argumentos habría que recordarles que mal puede retornar lo que nunca se fue –los estados son los principales responsables de la política de la globalización neoliberal, junto con las instituciones internacionales y el capital transnacional; asimismo, la configuración del dispositivo global de seguridad antiterrorista es la contrapartida necesaria de la continuidad de la política económica global neoliberal. Nada mejor, tal vez, que mirar hacia el “nuevo liberalismo intervencionista” posatentados del gobierno de Bush (desgravaciones fiscales a las grandes corporaciones, subvenciones a las compañías aéreas, contratos millonarios a la industria bélica y de inteligencia, etc.) (Frémeaux, 2001). O mejor aún, acompañar las enfáticas palabras del representante especial norteamericano para el comercio internacional, Robert Zoellick: “nuestra estrategia contra el terrorismo debe reconocer la interrelación entre seguridad y economía. Al promover la agenda de la OMC y, principalmente, una nueva negociación para liberalizar el comercio global, esas 142 naciones pueden contener la repulsiva destrucción contenida en el terrorismo”. Y advertir: “en caso de que la OMC dude, Estados Unidos conti-

nuará buscando la liberalización comercial, buscando alternativas regionales y de país a país. Ya estamos empeñados en negociaciones regionales como el ALCA” (*Folha de São Paulo*, 11/11/2001). Como se sabe, América Latina tiene una larga y penosa experiencia sobre el modo en que Estados Unidos consigue establecer relaciones íntimas entre seguridad y economía. Resta saber cómo y hasta dónde la impulsará en tiempos sombríos de terrorismo global y “nueva guerra”.

Entre dos fuegos, el movimiento social global contrahegemónico enfrenta difíciles desafíos en un contexto que, sin embargo, torna más necesario y urgente que nunca mantener la agenda de movilización y de convergencias contra el orden mundial neoliberal, ampliada después del 11 de septiembre hacia las cuestiones de seguridad y paz de los pueblos y la defensa multicultural de los derechos humanos y de las libertades democráticas amenazadas. O sea, contra el terrorismo y la guerra, a favor de un mundo más justo, democrático y seguro.

Bibliografía

- Aguiton, Christophe 2001a *Le monde nous appartient* (Paris: Plon).
- Aguiton, Christophe 2001b “Los movimientos de lucha contra la mundialización neoliberal después del 11 de septiembre de 2001”, en Internet, Informativo@Attac, 5 de octubre.
- Arrighi, Giovanni y Beverly J. Silver 2001 *Caos e Governabilidade* (Rio de Janeiro: Contraponto).
- Badinter, Robert 2001 “Après la victoire, la justice”, en *Le Monde* 28 de noviembre.
- Beck, Ulrich 2001 “El fin del neoliberalismo”, en *El País* 16 de noviembre.
- Bensaïd, Daniel y Willy Pelletier 2001 “Dieu, que ces guerres sont saintes!”, en *Le Monde* 30 de noviembre.
- Ceceña, Ana Esther 2001 “El encanto de Afganistán” en *Outras palavras*, <http://www.portoalegre2002.net>
- Cepik, Marco 2001 “Contra-terrorismo como guerra de coalizão: riscos sistêmicos”, en *Conjuntura Política*, octubre.
- Cox, Robert W. 1999 “Civil Society at the turn of the millenium. Prospects for an alternative world order”, en *Review of International Studies* N° 25.
- Della Porta, Donatella y Sidney Tarrow 2001 “Après Gênes et New York: le mouvement antimondialisation, la police et le terrorisme”, en *InforAttac* 5 de diciembre.
- El País* (España).
- Folha de Sao Paulo* (Sao Paulo).
- Frémeaux, Philippe 2001 “Le nouvel interventionisme libéral”, en *Alternatives Économiques* N° 197, noviembre.
- George, Susan 2001 “L’ordre liberal et ses basses oeuvres”, en *Le Monde Diplomatique*, agosto.
- Giddens, Anthony y Ralf Dahrendorf 2001 “Recuperaremos los valores de Occidente”, en *El País*, 18 de octubre.
- Gómez, José María 2000 *Política e democracia em tempos de globalização* (Petrópolis: Editora Vozes).
- Gómez, José María 2001 “Ativismo Transnacional e globalização contra-hegemônica. Seattle, Porto Alegre e depois”, en *Praia Vermelha* (Rio de Janeiro) N° 4.

- Hardt, Robert y Antonio Negri 2000 *Empire* (Paris: Exils Éditeur).
- Held, David *et al.* 1999 *Global Transformations* (Stanford: Stanford University Press).
- Held, David y Anthony McGrew 2001 *Prós e contras da globalizaçã* (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor).
- Held, David y Mary Kaldor 2001 “Aprender de las lecciones del pasado”, en *El País*, 8 de octubre.
- Ignatieff, Michael 2001 “El problema de las guerras por delegación”, en *El País* 16 de noviembre.
- Jornal do Brasil* (Brasil).
- La Jornada* (México).
- Le Monde* (Francia).
- Le Monde Diplomatique* (Francia).
- Mittelman, James H. 2000 *The Globalization Syndrome. Transformation and Resistance* (Princeton: Princeton University Press).
- Petrella, Ricardo 2001 “Criminaliser la contestation”, en *Le Monde Diplomatique* agosto.
- Rouleau, Eric 2001 “Visages changeants de l’islam politique”, en *Le Monde Diplomatique* noviembre.
- Safire, William 2001, en *El País* (Madrid) 16 de noviembre.
- Scholte, Jan Aart 2000 *Globalization. A critical Introduction* (Londres: Macmillan Press).
- Seoane, José y Emilio Taddei 2001 *Resistências mundiales (de Seattle a Porto Alegre)* (Buenos Aires: CLACSO).
- The Economist* (Londres).
- Touraine, Alain 2001 “Aujourd’hui et demain”, en *Le Monde*, 28 de noviembre.

Notas

1 Tal afirmación remite a la inagotable discusión –que por cierto no se pretende abordar aquí– acerca de las transformaciones y el papel del Estado Nación en el cuadro del capitalismo globalizado y en la cambiante estructura de poder mundial, y desde la perspectiva del pensamiento crítico, la pertinencia de las nociones de imperialismo, imperio y sistema hegemónico a fin de ca-

racterizar la actual forma de la dominación en el plano mundial (Hart y Negri, 2000; Arrighi y Silver, 2001). Cabe señalar que el reconocimiento de la lógica del dominio imperial, constituyendo y atravesando el proceso actual de transición y cambio del orden mundial –y por ende, el propio unilateralismo hegemónico norteamericano, cuando asume el papel de vector principal del comando político–, no significa que el campo histórico del bloque de poder mundial no esté atravesado de contradicciones, conflictos y clivajes entre las fuerzas públicas y privadas, nacionales, internacionales y transnacionales que lo constituyen.

2 Ver la breve síntesis (textos y cartografía) de Vicken Cheterian y Philippe Rekacewicz 2001, “Du Golfe à la Chine, des conflits à haut risque”, en *Le Monde Diplomatique* noviembre.

3 Sobre la compleja y sinuosa historia del islam político a lo largo del siglo XX y sus relaciones con el antioccidentalismo y, en particular, el antiamericanismo, ver Rouleau, Eric 2001, “Visages changeants de l’islam politique”, en *Le Monde Diplomatique*, noviembre.

4 Para un desarrollo más pormenorizado de la posición rusa en el nuevo contexto geopolítico del Asia Central y del mundo, ver Bachkatov, Nina 2001 “Pourquoi Moscou a sassie la ball au bond”, en *Le Monde Diplomatique*, noviembre.

5 Según la apropiada expresión de Michael Ignatieff, en *El País* 16/11/2001.

6 Un capítulo aparte merecería la grotesca y cínica operación de “pan y bomba”, que deja en las mismas manos caer del cielo la ayuda humanitaria que alimenta y el bombardeo “inteligente” que destruye y mata. Sobre la magnitud del desastre humanitario en Afganistán y las dificultades y paradojas –entre ellas, el hecho que casi dos tercios de la ayuda oficial internacional a la población afgana provenga de Estados Unidos, o que la submunición de las bombas de racimo tuviese una “desafortunada” similitud con los paquetes de comida– enfrentadas por las organizaciones y el Programa Mundial de Alimentos, ver “De poco sirve la ayuda si no hay seguridad y accesibilidad”, en *El País*, 28/11/2001; ver también “Bombas con aspecto de comida”, en *El País*, 02/11/2001.

7 Cabe señalar que la propuesta inicial del Departamento de Justicia, suavizada por el Congreso, llegaba a admitir como prueba válida, grabaciones y confesiones obtenidas por medios ilegales –la tortura, entre otros–, a condición de que la ilegalidad ocurriese fuera de territorio estadounidense (*Jornal do Brasil*, 26/09/2001). De todos modos, la hipótesis de la tortura de sospechosos para salvar vidas inocentes continúa siendo discutida incluso en medios liberales (Safire, William 2001, “El poder dictatorial de Bush”, en *El País*, 16/11/2001).

8 A ocho semanas de los bombardeos contra Afganistán, 85% apoya el trabajo de Bush y 89% aplaude la campaña bélica contra el terrorismo, a tal grado que 74% respaldaría alguna acción contra Irak (*La Jornada*, 02/12/2001). A su vez, una de cada cuatro personas considera que no se actúa con dureza suficiente y que son necesarias más restricciones en los derechos civiles. Con relación al apoyo de los interrogatorios sistemáticos a residentes de origen árabe, el de la población negra es mayor que el de la blanca (75% contra 64%), (*El País*, 02/12/2001). Sobre la ineficacia de la estrategia de detenciones preventivas implementada por el Departamento de Justicia, la crítica más contundente proviene, sintomáticamente, del propio círculo del FBI (ver McGee, Jim 2001, "Ex-FBI Officials Criticize Tactics On Terrorism", en *Washington Post*, 28 de noviembre.)

9 Sobre el proyecto unificado de lucha contra el terrorismo en la Unión Europea y las amenazas que pesan sobre los derechos democráticos (de asociación, de huelga, de expresión, etc.), ver Collectif d'Avocats Européens 2001 "Le prétext antiterroriste de Bruxelles", en *Le Monde* 14 de noviembre; y Boumediene-Thiery, Alima, Alain Krivine, Giuseppe Di Lelle Finuolli, 2001 "Europe: vers l'État d'exception", en *Le Monde*, 28 de noviembre.

10 Sobre el interminable debate en torno a la definición, el origen histórico, las causas y los principales impactos, ver Held et al. 1999; Held y McGrew, 2001. En la línea interpretativa de esos autores, aquí se entiende por globalización el proceso de transformación multidimensional y multinivel en la organización espacial de las relaciones sociales, generando flujos y redes transcontinentales o interregionales de actividad, interacción y, sobre todo, ejercicio de poder (Gomez, 2000).